

Aerte desvela que Sanidad se llevó a personal sanitario de las residencias durante la crisis

Toro denuncia que el Consell tardó 21 días en ordenar el cierre de los geriátricos y que no se hicieron test masivos hasta el 24 de abril

FRANCISCO RICÓS



VALENCIA. Había expectación por escuchar en Les Corts al presidente de la patronal de las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana, José María Toro, después de que la pandemia haya hecho mella en los internos. Cuatro de cada diez fallecidos por la pandemia del Covid-19 en tierras valencianas (el 37,6 %) han sido inquilinos de estas instalaciones. Toro compareció ayer en el hemicycle autonómico -como medida excepcional se utiliza este salón

y no las salas de comisiones- en el seno de un comité de título rimbombante: la Comisión Especial de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria. Y sus palabras no defraudaron a quienes esperaban una intervención dura hacia la actuación del Consell.

Toro afirmó que el Gobierno valenciano «no ha podido garantizar la atención sanitaria» de los residentes, que los médicos de las residencias están para poder rea-

lizar seguimiento de enfermos crónicos y no cuentan con la preparación necesaria para afrontar una pandemia, y menos aún cuando «Sanidad se ha llevado a profesionales sanitarios» de los geriátricos a trabajar a la medicina pública con motivo del coronavirus, lo que sumado a los sanitarios que se vieron afectados por el virus mermó los efectivos en los asilos. «Las residencias no son centros sanitarios», recordó.

La primera andanada del presi-

dente de Aerte la dirigió a la línea de flotación. Relató que el 26 de febrero de este año envió un correo electrónico «a las consellerías de Sanidad e Igualdad» para advertirles de lo que podía suceder y pedirles que se cerraran, «pero hablar de esto era alarmista», remarcó. «Y 21 días después ordenaron el cierre de las residencias. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen reaccionado antes?», se preguntó.

La segunda andanada de José María Toro fue denunciar que han sufrido «la falta de material de protección», que el Gobierno central bloqueó el mercado y ni se podía comprar ni se distribuía material, mientras los trabajadores de las residencias estaban desprotegidos y expuestos al contagio.

También incidió el directivo de Aerte en la falta de test: «Hemos trabajado a ciegas y hasta el 24 de abril no se empezaron a hacer test de manera masiva». Toro recordó a los diputados que «hay muchos centros aún en los que no se ha hecho pruebas a todos y sigue habiendo carencias de materiales, como guantes, en centros de mayores, de diversidad funcional, de salud mental o en servicios de ayuda a domicilio.»

José María Toro criticó que las consellerías no tenían ni idea de lo que sucedía dentro de las residencias, con los mayores encerrados en sus respectivas habitaciones para evitar la propagación del virus. «La norma de que no había que tener a la gente en las habitaciones llegó un mes y medio después» de que se dictara el cierre de los asilos. «Eso demuestra que no sabían lo que pasaba en las residencias», indicó.

Y la tercera fue cuando indicó que «no se podía garantizar la atención sanitaria» de los mayores porque los servicios sanitarios de los geriátricos están pensados para realizar seguimiento a enfermos crónicos no para afrontar una crisis sanitaria como la del Covid-19. Y a esta situación se le sumó que «Sanidad se ha llevado a profesionales sanitarios de las residencias» para atender en los hospitales, lo cual agravó la situación en los geriátricos, porque este hecho se sumó a las bajas en el personal causadas por la infección del coronavirus.

Durante la intervención de los portavoces parlamentarios la más combativa contra la gestión privada de las residencias fue Pilar Lima, de Unidas Podemos, que lamentó la «falta de autocrítica» del sector y aseguró que «la vida no es un negocio».

Para Lima, la crisis sanitaria del Covid-19 ha de-



José María Toro, ayer en Les Corts, junto a la presidenta de la comisión de reconstrucción. IRENE MARSILLA

Un experto reclama mayor implicación de los centros de salud en los asilos

F. R.

VALENCIA. Eduardo Zafra, presidente de la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud, y médico, propuso ayer en la Comisión Especial de Estudio de Reconstrucción, celebrada en Les Corts, una mayor implicación de los centros de salud atención primaria en el control médico de las residencias de mayores.

Zafra reclamó una mayor coordinación sociosanitaria por que «lo ocurrido en las residen-

cias» durante la crisis del Covid-19 «ha sido terrible» y calificó de «low cost» el sistema sanitario de los geriátricos.

Zafra defendió la sanidad pública, cuestión que le afeó el portavoz de Vox en esa comisión, José María Llanos que le preguntó si se había contado con la sanidad privada para algo e incidió en que «había orden de no dar respiradores a los mayores de 70 años por si se necesitaban para otros enfermos». En ninguna de ambas cuestiones entró a responder Zafra.

Si indicó que la sanidad público-privada, debe de estar separada de la pública y abogó por la reversión de todas las concesiones, pero sin que le cueste un euro al erario público.

Eduardo Zafra abogó por evitar la fuga de personal bien formado a otros países y por acabar la temporalidad en la contratación. También reclamó autonomía en la gestión de los hospitales y que las direcciones y las gerencias «tienen que ser profesionales. Ya está bien que se conciben con carácter electoral».

Y afirmó que el sistema sanitario «ha salido fortalecido moralmente, pero hundido física y psíquicamente».

2021, peor para el teatro

Y en su intervención en esta comisión, el empresario cultural Enrique Fayos pidió cambiar el decreto del Consell que marca un aforo de un 75 % en estas salas, como los cines, porque esa limitación contribuye a generar «miedo e inseguridad» entre los espectadores. Considera que «no tiene sentido» que no haya restricciones para viajar en metro o autobús y sí en los teatros. Reclamó que el Consell se comprometa a ejecutar todo el presupuesto para artes escénicas de 2020 y agilizar las ayudas pues prevé un 2021 «quizá peor».

El presidente de Aerte reclama humildad a Oltra y que se una a Barceló y las residencias en un grupo de trabajo de prevención

«El problema no ha estado en el sistema residencial, sino en la incapacidad del de salud para atender a los mayores», afirma Toro

mostrado que el modelo de atención ha mostrado su fracaso. Y José María Toro no cajo ante esa acusación. El presidente de la patronal de las residencias aseguró que mientras que el porcentaje de residentes fallecidos en la Comunitat «es del 2.06% del total de residentes, en Francia ha sido de un 2.4% y en Suecia ha sido de un 2.8%».

El dirigente empresarial también comparó las muertes totales entre la Comunitat y otros países. «El porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total ha sido en la Comunitat Valenciana del 37,61 %, mientras que en Canadá ha sido del 82 %, el 58 % en Noruega o el 50 % en Finlandia». Esto demuestra, según José María Toro, «que el problema no ha estado en el modelo residencial, sino en la incapacidad del sistema de salud de atender a todas las personas que lo necesitaban».

Toro criticó también que no ha habido consenso con la vicepresidenta de Oltra a la hora de poner en marcha el protocolo de desescalada «se nos ha pedido opinión pero no ha habido consenso», indicó en los pasillos el presidente de Aerte.

Durante su intervención en Les Corts el dirigente de la patronal de las residencias reclamó en dos ocasiones «humildad» a la vicepresidenta Mónica Oltra, sin nombrarla, para que se sume a la creación de un grupo de trabajo junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y las propias residencias, de cara a prevenir una situación como la que se ha vivido en estos centros durante estos últimos cuatro meses.

Toro se quejó de la poca atención que han recibido por parte de la vicepresidenta Oltra durante este tiempo. «No se ha sentado con el sector. Hablé con Oltra una sola vez, el 23 de mayo», dijo.

Desde la conselleria de Oltra se aprestaron a indicar que la vicepresidenta ha hablado dos veces por teléfono con Aerte, ha participado en una videoconferencia, en una reunión presencial y se comunicó seis veces por mensaje. «El contacto con el presidente del lobby de empresas del sector residencial (Aerte) ha sido constante por parte del personal directivo de la conselleria en los diferentes ámbitos en que le afecta a su sector» y señalaron que Toro tiene el teléfono de la vicepresidenta.

Dieciséis contagiados en una reunión familiar en Castellón, segundo brote de la Comunitat

La Generalitat descarta el confinamiento de la población en Rafelbunyol porque considera que el caso «está encapsulado»

ADA DASÍ/F. R.

VALENCIA. Tras el brote de Covid en Rafelbunyol detectado la semana pasada a 14 empleados de una empresa cárnica, Salud Pública confirmó ayer uno nuevo en Castellón que afecta a 16 personas de diferentes núcleos familiares.

Según la investigación realizada por Salud Pública, el origen del brote fue una reunión familiar durante la celebración de San Juan. Y en tan sólo seis días se han manifestado los síntomas de contagio en esas 16 personas de la capital castellanense.

Una de las familias participantes en esa celebración —la festividad fue el miércoles pasado, 24 de junio— procedía de la ciudad catalana de Lleida y uno de sus miembros presentó síntomas el pasado día 22 de junio, aseguraron las mismas fuentes. Pero a pesar de los síntomas, al parecer esa persona participó en el encuentro familiar, lo cual supone que fue el transmisor del coronavirus.

De estos 16 casos positivos confirmados por Salud Pública en la capital de la Plana ninguno se encuentra afectado de gravedad. Las mismas fuentes oficiales aseguraron que todos se hallan aislados y se está realizando un seguimiento de los contactos que ha tenido cada uno de los contagiados.

Por lo que respecta al brote localizado en Rafelbunyol, Salud Pública confirmó también ayer que «seis de los primeros siete casos positivos ya han sido dados de alta». El resto continúa pendiente de la confirmación definitiva a través de la prueba sanguínea ELISA de alto rendimiento «para determinar si se consideran parte del brote por ser casos activos o se confirman como infecciones anteriores».

En cuanto a si las autoridades autonómicas consideran necesario confinar a toda la población de esta localidad de l'Horta Nord, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que el brote está «encapsulado» por lo que «no hay que tomar medidas añadidas». No obstante, el jefe del Consell añadió que «las decisiones se adoptarán en función de lo que diga la conselleria de Sanidad y los expertos».

El presidente inició en que «no parece que estemos en una situación previa a un confina-

miento de esta ciudad» y apuntó la necesidad de «detectar inmediatamente, de forma precoz, cualquier contagio para que se le dé la trazabilidad y respuesta oportuna». «Tendremos brotes y rebrotes, pero de lo que se trata es de encapsularlos adecuadamente», afirmó Puig.

Desde la empresa afectada indicaron que hay ocho casos po-

sitivos después de que a seis de los 14 se les haya dado el alta, y permanecen aislados en sus domicilios. También aseguraron que han realizado pruebas a los 412 empleados de la sala de despiece.

Y ayer, por segundo día consecutivo, no se registraron fallecimientos por coronavirus en la Comunitat Valenciana (se arras-

traron 1.473 muertos). En cuanto a nuevos casos, se han detectado cuatro a través de PCR (dos ancianos en residencias y dos trabajadores de geriátricos), que elevan a 11.543 el total de positivos. En esa cifra no se encuentran los 16 casos confirmados del brote en Castellón. Según la conselleria de Sanidad, quedan activos 2.099 casos.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el congreso el pasado jueves. POOL

Sanidad apuesta por confinamientos «quirúrgicos» para atajar los nuevos focos

España registra la cifra de contagios más baja de los últimos doce días

M. SÁIZ-PARDO/ A. SOTO

MADRID. Los responsables de Sanidad están lejos, al menos por el momento, de plantearse la declaración de un nuevo estado de alarma para atajar los rebrotes de coronavirus que durante la primera semana de la 'nueva normalidad' se han multiplicado por 11 de las 17 comunidades autónomas. El titular de Sanidad, Salvador Illa, que no obstante no descartó ayer tener que volver a un aislamiento generalizado si la situación se agravara, abogó por los confinamientos «quirúrgicos» como la mejor herramienta para atajar estos nuevos focos.

Los expertos epidemiólogos

que asesoran a Moncloa llevan días apuntando a este tipo de «acciones locales» a las que ayer se refirió Illa y que, en esencia, pasarían por «confinamientos totales» este mismo mes de julio de zonas o colectivos los más restringidos posibles como serían edificios, urbanizaciones, empresas o polígonos industriales.

En el plano estadístico, España registró en las últimas 24 horas sólo 84 contagios. Es una cifra esperanzadora porque se trata del número de nuevos infectados diarios más bajo desde que el país entró en la denominada 'nueva normalidad' hace ya más de una semana. Es más, es el volumen más reducido de positivos desde el martes 16 de junio, cuando la pandemia parecía vivir sus horas más bajas y las comunidades solo comunicaron 76 nuevos infectados. Desde entonces, y

azuzados por los continuos rebrotes de los últimos días tras el fin del confinamiento, el volumen de nuevos infectados diarios no había bajado del centenar. No obstante, el descenso del número de contagiados (84 casos este lunes frente a los picos de 191 del viernes o el sábado) puede ser engañoso, ya que varias comunidades podrían haberse retrasado en la notificación de casos durante el fin de semana.

Remdesivir

En cuanto a los tratamientos, la farmacéutica Gilead ya ha fijado un precio para el medicamento más prometedor contra el coronavirus, el remdesivir. Una dosis se venderá en los países desarrollados por 347 euros, de manera que el tratamiento completo, que habitualmente consistirá de seis viales, costará 2.080 euros por persona.